

# Claves

Notas del Escenario Político  
21 de Abril, 2010

## El Plan de Financiamiento Post Terremoto: Aspectos Políticos

El Presidente Piñera anunció su plan de financiamiento, que incluye un alza transitoria de impuestos a las grandes empresas de 17% a 20% el año 2011, que baja a 18,5% el año 2012; un aumento de los impuestos específicos al tabaco; un alza en las contribuciones a las propiedades con un alto avalúo fiscal y propuso un aumento voluntario del royalty a la minería que todavía no se especifica en detalles. Paralelamente, fija algunos incentivos tributarios: mantiene la rebaja del impuesto de timbres y estampillas hecha en el Gobierno Bachelet y repone la idea de una depreciación acelerada, que se recordará quiso impulsar el Ministro Velasco el año 2007 sin resultado. Asimismo, anuncia un endeudamiento externo de US\$1.000 Millones y una emisión de deuda interna, sin precisar su monto y calendario; la utilización de fondos del FEES y la utilización de parte de los fondos de la Ley Reservada del Cobre por un monto, según el Ministro Ravinet, que ascendería a unos US\$1.200 Millones.

Las reacciones iniciales fijan señales políticas muy relevantes y delimitan el escenario que esta iniciativa puede tener. Revisemos sucintamente ese cuadro:

**Primero**, las lecturas políticas globales destacan dos aspectos:

- El involucramiento personal del Presidente Piñera en las definiciones adoptadas. Incluso, algunas versiones señalan que él subió en un punto el alza del impuesto a las empresas respecto de lo propuesto originalmente por Hacienda, para llegar al 20% el año 2011;
- La toma de decisión radicó básicamente en La Moneda, en especial en los ministros Hinzpeter y Larroulet, más el Presidente Piñera. La posición del Ministro de Hacienda Larraín queda claramente en un segundo plano ni es el que encabeza la estrategia política y parlamentaria para su aprobación;
- Se enfatiza que este diseño de un alza de impuestos es un triunfo político del Ministro Hinzpeter (RN) y que, junto con separar la imagen de Piñera de su condición de empresario, esta iniciativa busca "neutralizar a la Concertación".

**Segundo**, un importante sector de la UDI, encabezados por el Senador Novoa y el ex-Ministro Büchi, están articulando un cuestionamiento político-estratégico contra esta decisión de subir impuestos, pero que también opera como un factor táctico de contrapeso a la tesis de la Concertación de transformar en permanente esta alza de impuestos. El planteamiento de ambos es básicamente el siguiente:

- El Senador Novoa plantea que es un error el alza tributaria porque va a afectar el crecimiento, la productividad y la competitividad del país y, sostiene, la justificación real "para alzar los impuestos era política" y no de necesidad fiscal. Agrega que esa razón política constituye un error estratégico, porque "uno, en política, tiene que

reafirmar los valores propios, no los del adversario" y que si el Gobierno Piñera no escucha estas preocupaciones de la UDI "nosotros sentiríamos que estamos en un gobierno distinto al que elegimos". En ese sentido, advierte que apoyará las medidas presidenciales, pero que ello no debe implicar que "se malinterprete nuestra lealtad";

- El ex-Ministro Buchi (UDI) cuestiona la racionalidad política del alza de impuestos: señala que es un error del Gobierno Piñera ceder tan pronto a las exigencias de la Concertación y que este diseño va a afectar el crecimiento y la creación de empleos. A su juicio, esto no sólo no resuelve bien los problemas del terremoto, sino que afecta "una razón por la cual este gobierno debía marcar una diferencia con el gobierno anterior, que es relanzar el crecimiento". Su queja es que el Gobierno Piñera corre el riesgo de cambiar su rumbo estratégico, se pierda el sello de un gobierno de centro-derecha y afecte el desafío de alcanzar el desarrollo bajo estas ideas. Su crítica, entonces, es política e ideológica.

**Tercero**, la Concertación conserva su perplejidad y dificultades de maniobra:

- Algunos destacan que esta alza tributaria es un triunfo de las ideas de la Concertación, como Tironi, y otros valoran que Piñera hizo algo que la Concertación no fue capaz de hacer, como Vidal; aunque esta afirmación es cuestionada y cuestionable;
- Otros advierten que es una reforma tramposa, porque hay un alza tributaria (que sólo es transitoria) y paralelamente hay beneficios tributarios significativos, como mantener el impuesto de timbres y estampillas y la depreciación acelerada. Varios economistas (Marshall, Landerretche, entre otros) y algunos parlamentarios destacan esa objeción, que –sin embargo– se limita a los aspectos técnicos y carece de densidad política propia;
- Por último, la mayoría trata de armar una estrategia que combine dos aspectos: establecer un espíritu de colaboración que les otorgue legitimidad y presencia pública y, a su vez, obtener un triunfo político en las negociaciones por la vía de lograr un cambio a su favor en el proyecto final. La dureza inicial de algunos actores no debe entenderse como un rechazo final y fatal, sino como un punto negociador.

**Cuarto**, entre los empresarios hay dos fenómenos muy distintos:

- La CPC, varias de sus ramas y los líderes de empresas acogieron con resignación el alza tributaria y se refugian en que es una reforma transitoria. La transitoriedad se transforma en su "Linea Maginot"... que saben puede ser igualmente feble que la histórica;
- Existe un fuerte aislamiento de las empresas mineras. Observar tres rasgos:
  - La CPC no ha levantado una objeción a que se altere de nuevo la "invariabilidad tributaria", no hay voces que adviertan los riesgo de imagen-país y los empresarios de otros sectores tienden a eludir el tema del royalty;
  - El Presidente del Consejo Minero Costabal acusó discriminación al sector minero e incluso abrió un flanco tácito con otras ramas empresariales al sostener que "a otros sectores que también les va bien en el país" no se les aplica el mismo criterio;

- El Ministro Golborne lanza una ostensible presión al sector minero en su entrevista en el Diario Financiero (21 de Abril) al sostener que "hoy en el mundo cada vez más se requiere lo que se llama licencia social" y que en ese contexto "cómo responderá cada uno, es un problema que cada cual estimará, y algunos son capaces de vivir con sanción social mucho tiempo". El tono es una amenaza, que apunta a la legitimidad de las decisiones que adopten las empresas mineras. Es un lenguaje claramente hostil.

En síntesis, los ejes dominantes de la iniciativa son:

- El Presidente Piñera está empeñado personalmente en esta iniciativa y sabe que parte importante de su capital político y de su gobierno está en juego;
- Hay una resistencia de la UDI que tiene una connotación estratégica e ideológica, pero que todavía es minoritaria y se enfrenta a un gobierno no-ideológico y a una lógica política pragmática;
- La Concertación intenta un discurso, pero es muy débil y tiene poco espacio de legitimidad frente al sentimiento de urgencia de la ciudadanía. Y, más a fondo, la centro-izquierda está sin una concepción nítida y clara sobre cómo aborda desde sus ideas los asuntos de productividad, competitividad y creación de empleo;
- El sector empresarial está enfrentado a un problema de legitimidad que limita su capacidad de maniobra y éste nudo se traslada especialmente al sector minero.

Lo que prevemos es que se impondrá una lógica pragmática de negociación política, en el que los márgenes de maniobra van a depender de la legitimidad que logren los actores y donde el Gobierno Piñera tiene espacio para sostener su posición "neteando" argumentos de lado y lado. Hay un punto de equilibrio, todavía frágil y áspero, pero que puede armar.